

**JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA:** Sensuntepeque, a las catorce horas cinco minutos del día trece de junio de dos mil veintitrés.

Por recibido el escrito firmado por los licenciados: **DENNIS ESTANLEY MUÑOZ ROSA** y **JOSÉ GERTRUDIS PERLA REYES**, ambos en su calidad de defensor particular el primero de los imputados: **SAUL AGUSTIN RIVAS ORTEGA**; **TEODORO ANTONIO PACHECO**; **MIGUEL ANGEL GAMEZ**; **PEDRO ANTONIO RIVAS LAINEZ**; y, **ALEJANDRO LAINEZ GARCIA**; y, el segundo del imputado **FIDEL DE DOLORES RECINOS ALAS**; por medio del cual solicitan se convoque audiencia especial de revisión de medidas; y, se tenga por solicitada la intervención del personal de la **FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE GUATEMALA**, a efecto que practiquen procedimientos y puedan intervenir como peritos accidentales y realizar un peritaje con sus conclusiones y cotejar el resultado del Instituto de Medicina Legal. Presentado en la causa penal número **C.P. 8-2023-1**, instruida en contra de los imputados presentes y detenidos: 1) **FIDEL DE DOLORES RECINOS ALAS**; 2) **SAUL AGUSTIN RIVAS ORTEGA**; 3) **TEODORO ANTONIO PACHECO**; 4) **MIGUEL ANGEL GAMEZ**; 5) **PEDRO ANTONIO RIVAS LAINEZ**; y, 6) **ALEJANDRO LAINEZ GARCIA**; e, imputados ausentes 7) **JOSE EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA** y 8) **ARTURO SERRANO ASCENCIO**; todos por los delitos de: 1) **ASESINATO**, previsto y sancionado en el artículo 154 inc. 2°, relacionado con los Arts. 152 y 153 del Código Penal derogado en adelante C.Pn. derogado; en perjuicio de la vida de la occisa **MARIA INES ALVARENGA LEIVA**; 2) **PRIVACION DE LIBERTAD** previsto y sancionado en el Art. 218 del C.Pn. derogado, en perjuicio de la autonomía personal de la señora **MARIA INES ALVARENGA LEIVA**; y, 3) **ASOCIACIONES ILICITAS**, previsto y sancionado en el Art. 407 del C.Pn. derogado, en perjuicio de **LA PAZ PÚBLICA**.

Previo a resolver lo pertinente la suscrita hace las siguientes **CONSIDERACIONES**:

#### **I. DE LA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR.**

Con relación a la petición de la audiencia de revisión de medida, solicitada por los defensores particulares en escrito relacionado en el preámbulo de este auto, se trae alusión que el art. 343 del Código Procesal Penal en adelante C.Pr.Pn. establece que *"las partes, en cualquier estado del procedimiento, podrán solicitar la revisión de una medida cautelar sin perjuicio de la responsabilidad profesional, cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva"*. (sic) (subrayado y negrita es propio de este Juzgado)

En ese sentido se advierte que los solicitantes tienen la legitimación procesal para realizar la petición, en atención que consta que son los profesionales que ejercen la defensa técnica de los imputados supra relacionados en este caso; en consecuencia, se procede analizar la pertinencia de la solicitud de conformidad al art. 344 C.Pr.Pn., que establece *"...presentada la solicitud, el juez calificará su pertinencia y que ésta no sea dilatoria o repetitiva. De ser procedente, se convocará a audiencia oral en el plazo de tres días con*



*citación de todas las partes; la audiencia se llevará a cabo con aquellos que concurren. Si la parte solicitante no se presenta a la audiencia se tendrá por desistida su petición..." (sic). (resaltado es propio)*

Los defensores particulares fundamentan su petición, "... en los Arts.343 y 344 del Código Procesal Penal, a solicitar Medidas Sustitutivas a la Detención Provisional, considerando que se puede solicitar Medidas Sustitutivas a la Detención Provisional en la que se encuentra mi representada." (sic) entre los argumentos se determina que se alude de forma singular y en los casos que se menciona los nombres de los imputados se excluye el nombre del procesado FIDEL DE DOLORES RECINOS ALAS; no obstante, dicho defecto se trae alusión que la petición es fundamentada con criterio jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional referencia 37-2007, entre otras sentencias con referencias 31-1-2000; 14-XII-2011, HC 452-99 e INC. 37-2007; refieren a las reglas del rebus sic stantibus, lo establecido en el art. 335 numeral 1 C.Pr.Pn. art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; asimismo, en un primer momento en las consideraciones del escrito se refiere que:

*"...en este caso tiene sentido que exista una audiencia especial de revisión de medidas cautelares para verificar además de la necesidad es justamente que estamos en presencia de lo que tiene que ver con la salud de los procesados, al respecto existen ya informes de hace un par de meses de la salud de los procesados, pero es por ello que previo a que se realice el señalamiento audiencia de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional, se le pide a esta sede judicial que gire oficios a los centros penales en los que se encuentran para verificar el estado de salud de nuestros representados y en consecuencia con mención de la misma se señale la Audiencia que esta pidiendo mediante escrito..." (sic)*

Y posterior a dicho argumento se establece siempre en las consideraciones los defensores particulares que: "... es por ello, que para acreditar que mis representados **SAUL AGUSTIN RIVAS ORTEGA, TEODORO ANTONIO PACHECO, MIGUEL ANGEL GAMEZ, PEDRO ANTONIO RIVAS LAINEZ, ALEJANDRO LAINEZ GARCIA**, por lo que debería de actualizarse cual esta en estado de salud de nuestros representados.

*Es por tal motivo que mediante la certificación del informe de salud realizado por personal médico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y otros resúmenes clínicos que también anexo a este escrito, vengo a acreditar en este caso particular la situación de salud que atraviesan mis representados, y es por ello que por razones de humanidad, salud, y de encajar en grupos vulnerables como los de la tercera edad es que ratifico la petición de revisión de medidas a favor de mis representados, según lo esgrimido anteriormente, y por lo tanto, su autoridad judicial señale la respectiva audiencia especial..." (sic) (subrayado propio)*



Asimismo, proponen los defensores particulares que la suscrita decrete las medidas alternas a la detención "... más comunes como presentarse periódicamente al Juzgado que designe, la prohibición de salir del país, la obligación de someterse al cuidado de una persona determinada, en este caso puede ser algún pariente, o su servidor en calidad de defensor particular, sino también por medio del presente escrito oferta de conformidad al Art. 332 numeral 7 tanto caución económica equivalente a la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dejando a su criterio si la cantidad ofertada en conceptos de fianza pueda aumentar según su criterio, para garantizar su comparecencia a cualquier llamado de cualquier autoridad administrativa y judicial, así como de manera paralela o alternativa la constitución de hipoteca propiedad de nuestros representados." (sic)

Del libelo de dicha petición se advierte que entre los criterios jurisprudenciales que alude verbigracia se cita el de la Sala de lo Constitucional referencia 37-2007, entre otros, fueron los mismos argumentos expuestos en la petición de audiencia especial de revisión de medida, realizada por el licenciado Muñoz Rosa, presentada en secretaría de este Juzgado en fecha 3 de febrero de 2023, a la cual se le dio el trámite respecto como consta en auto de las ocho horas cinco minutos del día seis de febrero del dos mil veintitrés, en la que se convocó para la audiencia especial de revisión de medida para el día ocho de febrero del presente año.

En la citada audiencia especial la suscrita valoro lo pertinente a dichos argumentos entre los que se retomó el punto de la salud de los imputados con una certificación de un informe extendido por la Procuraduría de los Derechos Humanos; si bien la suscrita advierte que la salud de una persona puede ser cambiante por diferentes condiciones, siendo que es un punto que alegan los defensores particulares son estos mismos que deben de demostrar los argumentos para que la suscrita llegue al convencimiento de convocar a que estos sean discutidos en audiencia, máxime en este caso que existe una petición que ya fue discutida con relación al estado de salud de los procesados.

No obstante, el defensor en un primer momento en sus consideraciones pretende que la suscrita gire oficio al centro penal para verificar el estado de salud de los procesados y como consecuencia de ese informe señalar la audiencia respectiva, petición que la suscrita no se pronuncia pues en la parte petitoria no se hace alusión al respecto; y, además posterior refiere que presenta los documentos con los que demuestra el estado de salud de los imputados, mismos que no fueron incorporados a la solicitud, si bien se puede aludir que estos pudieron ser presentados en la audiencia especial; no obstante, sea repetitivo la defensa debe actuar de manera diligente en demostrar los argumentos nuevos que la suscrita debería discutir en audiencia, pues los mismos ya fueron debatidos en audiencia en la primer petición.



Pero es importante traerlo alusión en atención que el tiempo para tramitar este tipo de diligencias es corto; y, fue labor de la defensa en caso pretendía incorporar dicha información debía requerir a la suscrita solicitar los informes para verificar el estado de salud de los imputados; y, no pretender modificar el procedimiento para la misma, labor que le competía como defensa solicitar antes de realizar sobre la petición en concreto.

En atención al principio de imparcialidad y la suscrita como garante de derechos de las partes materiales, aunque los defensores no aluden a los mismos, pero en atención que el derecho de la salud establecido en el inciso final del art. 1 y art. 65 ambos de la Constitución de la República; es de conocimiento que constan agregados al expediente los informes de Reconocimiento Médico Forense de Estado de Salud, de los procesados Alejandro Lainez García; Teodoro Antonio Pachecho; Miguel Ángel Gámez; y, Pedro Antonio Rivas Lainez, todos practicados el día 17 de abril del presente año, por la doctora Estela Bonilla Cruz, en su calidad de médico forense, adscrita al Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer" en los cuales no se evidencia un estado crítico de salud de los imputados que lleve a la suscrita convocar audiencia especial para verificar dicho punto, aunque la defensa no lo haya mencionado.

Además, los padecimientos a los que se aluden en dichos reconocimientos según el informe rendido por el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, en oficio número 2821 de fecha 18 de abril del presente año, se requirió a los centros penales donde se encuentren los imputados que estos recibieran la atención médica adecuada de acuerdo a las recomendaciones de medicina legal.

Por ello, al no demostrar los defensores la existencia de una modificación del estado de salud de los imputados desde la fecha de dichos reconocimientos, asimismo robustecer con elementos de prueba las afirmaciones de hecho realizadas en su petición, de los cuales como antes se estableció son argumentos similares respecto al punto de la salud que ya fueron discutidos y valorados en audiencia especial de revisión de medida, es que la suscrita advierte una petición repetitiva.

Por tanto, la motivación para convocar a una nueva audiencia especial para verificar la variabilidad y considerar modificar la medida más gravosa no está justificada por parte de la defensa, ya que solo menciona dicho principio pero no fundamenta, ni demuestran cuales son las condiciones de variabilidad que deben ser valoradas, tomando en cuenta que ya existió pronunciamiento de dicha petición con anterioridad y que la naturaleza de la audiencia solicitada es revisar dicha variabilidad de los supuestos que llevaron a tomar la decisión de privar preventivamente la libertad a los procesados.

Dicho principio hace acopio a lo llamado "rebus sic stantibus", que lleva inmerso el principio de variabilidad, lo que nos lleva a determinar que cualquier alteración sustancial



en los supuestos que dieron origen a tomar la medida cautelar, implica por ende la modificación de la misma, pues es entendido que las medidas cautelares son temporales.

En atención a ello, al no existir argumentos de variación en los elementos que fueron confirmados en la audiencia especial de revisión de medida y los argumentos de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de la ciudad de Cojutepeque, Cuscatlán; no se accederá a lo solicitado, dejando salvo el derecho a la defensa de interponer los medios impugnativos correspondientes.

## II. SOLICITUD DE OFRECIMIENTO DE PRUEBA CIENTIFICA EN LA EXHUMACIÓN.

Con relación a la petición del ofrecimiento de prueba pericial refieren los defensores que: "... en virtud de existir señales en el presente proceso que eventualmente no se está cumpliendo el principio de Imparcialidad, como por ejemplo interpretar que una sospecha puede dar lugar a una decisión judicial, tal como obra en la presente carpeta judicial, y es por ello que esta DEFENSA TECNICA, en virtud del principio de igualdad de armas procesales viene a ofertar que en la práctica de la exhumación señalada para el 22 de los corrientes mes y año este presente personal de la **FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE GUATEMALA**, quienes tiene la experticia para realizar exhumaciones como la que se practicara en este proceso el día mencionado, en la cual, por considerar que sería legal, pertinente y útil su intervención venimos a pedir que realicen el siguiente procedimiento:

1. Efectuar primariamente un Estudio Antropológico Social.
2. Fase de Arqueología Forense.
  - a) Localizar el sitio de la exhumación.
  - b) Exhumación propiamente dicha.
3. Fase de Antropología Forense
  - a) Trabajo de laboratorio.
    - i. Limpieza de osamentas.
    - ii. Extensión de las osamentas.
    - iii. Medidas antropológicas.
      - 1) Talla.
      - 2) Lateralidad.
      - 3) Género.
4. Fase de Genética Forense.
5. Emisión de Informe." (sic)

Y en la parte petitoria requieren los defensores que solicitan "... la intervención del personal de la **FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE GUATEMALA**, a efecto que practiquen los procedimientos antes mencionados y en consecuencia se le de



*intervención de mérito en el carácter de peritos accidentales para que puedan realizar un peritaje con las conclusiones respectivas y de tal manera sean cotejada con las que realice el Instituto de Medicina Legal. Por lo tanto, que se practique el trámite de mérito correspondiente ante el ofertatorio de prueba pericial accidental de conformidad a los Arts. 226 y siguientes del Código Procesal Penal." (sic)*

Como es de conocimiento de las partes técnicas, en la etapa que nos encontramos no es el momento procesal para ofrecer prueba de ningún tipo pues la fase de instrucción no ha finalizado, pero si el momento para la práctica de elementos de convicción que posterior pueden ser ofrecidos como prueba en legal forma.

No obstante, los defensores no hacen una petición completa, pues inicialmente aluden a que ofrecen prueba pericial sin determinar que prueba y además como supra se relacionó no es el momento oportuno.

Si bien el art. 226 del Código Procesal Penal facultad la autorización para ordenar una pericia dentro del proceso penal con el fin de descubrir o valorar un elemento de prueba en el que se requiera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica; dicha pericia será practicada por perito que la ley los clasifica como permanente o accidentales.

Los defensores no han justificado su petición en concreto con base legal, ni qué clase de pericia en específico para determinar si se encuentra dentro del catálogo de actos urgentes de comprobación, pero es de advertir que los procedimientos que pretende que realice el personal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, son similares a los que propuso el órgano acusador en la petición de la exhumación que ya fue autorizada, es decir solo la participación de otros peritos en la misma diligencia.

No obstante, no es legal el autorizar el actuar de peritos accidentales, sin previo haber sido tramitados conforme a ley el nombramiento de los mismos, que es lo que se puede interpretar del escrito de los defensores ya que no son claros en el mismo en cuanto a este punto.

Pero de la lectura de la petición para realizar la práctica de las pericias que pretende tiene que cumplir con el requisito para nombrar a los peritos conforme a ley, en el caso que nos ocupa no se individualiza los profesionales que pretenden que se nombren, ni legitiman los atestados correspondientes de conformidad al art. 227 C.Pr.Pn., para valorar la procedencia del nombramiento, máxime que lo que se pretende es que se coteje la experticia de un perito permanente que cumple con los requisitos de ley.

Asimismo, se trae alusión lo establecido en el art. 232 C.Pr.Pn. que establece: "en el término de tres días a partir de la notificación, las partes podrán proponer a su costa otro



perito. También podrán proponer puntos de pericia distintos u objetar los propuestos por el juez o tribunal." (sic)

Se advierte que los defensores fueron notificados de la autorización de la diligencia de exhumación en la que pretenden que participen otros peritos, el día veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, es decir que a la fecha de presentación del escrito que fue ocho de junio de dos mil veintitrés, es evidente que el plazo de ley para ampararse a proponer perito de conformidad al artículo relacionado en el párrafo que antecede ya precluyó; además que el nombramiento de perito no cumple con los requisitos de ley; por ello, no es procedente autorizar la petición de los defensores.

### III. DE LAS ALEGACIONES DE IMPARCIALIDAD.

Los defensores acusan un actuar imparcial en la tramitación del proceso, ya que refieren que por una sospecha se ha dado lugar a una decisión judicial entendiéndose al acto urgente de comprobación de la exhumación solicitada por el ente fiscal, ya que no es claro en determinarlo de esa forma pero relaciona el mismo consta en el proceso la documentación de los indicios que fundamentaron acceder a la petición del órgano acusador y no una mera afirmación de hecho como lo hace la defensa ya que solo alude que el actuar imparcial está documentado en el expediente sin relacionar a que actos se refiere y no ha revisado la documentación que consta agregada al proceso.

Por ello, el no estar de acuerdo con alguna decisión por diferentes motivos no es fundamento para alegar un actuar imparcial; y, no consta medio de impugnación alguno si la defensa consideraba que el actuar de la suscrita no estaba apegado a derecho; ni haber iniciado procedimiento de la recusa establecido en el art. 66 del C.Pr.Pn.; requiriendo en lo sucesivo a la defensa que al hacer ese tipo de afirmaciones deberá realizarlo por los mecanismos establecidos y no hacer afirmaciones de hecho, ya que sus calidades profesionales se los exige; asimismo, que la presentación de peticiones infundadas o manifiestamente improcedentes, facultan a la suscrita de librar el informe del procedimiento sancionatorio de conformidad a los artículos 131 y 132 del C.Pr.Pn.

En razón de lo anterior argumentado y arts. 226, 227, 232, 343, 344 del Código Procesal Penal y disposiciones legales citadas, se **RESUELVE**:

**A) AGRÉGUENSE** el escrito relacionado en el preámbulo de esta resolución a la causa penal número **C.P. 8-2023-1**.

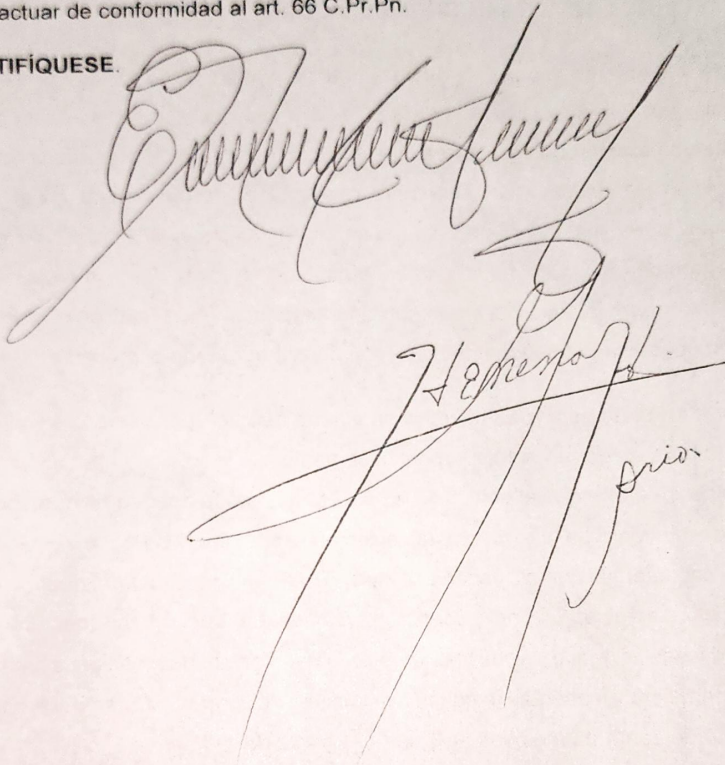
**B) NO HA LUGAR** la solicitud de audiencia de revisión de medida requerida por los licenciados **DENNIS ESTANLEY MUÑOZ ROSA** y **JOSÉ GERTRUDIS PERLA REYES**, por ser repetitiva la misma tomando en cuenta los argumentos expuestos en esta resolución,



C) **NO HA LUGAR**, a la solicitud de nombramiento de perito accidental de la **FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE GUATEMALA**, por no especificarse y demostrarse la experticia del profesional que se pretende nombrar, asimismo la práctica de las diligencias requeridas por no ser posible el nombramiento de peritos además no se ha fundamentado la solicitud en legal forma, tomando en cuenta lo antes considerado, dejando salvo el derecho a los defensores presenten en legal forma su petición dentro del plazo de instrucción.

D) **Previénese** a los defensores particulares se abstengan de manifestar un actuar imparcial por parte de la suscrita, por existir los mecanismos respectivos en caso de advertir tal actuar de conformidad al art. 66 C.Pr.Pn.

NOTIFÍQUESE.

The block contains two handwritten signatures in black ink. The first signature is large and stylized, appearing to read 'Carmen Elena Linares'. The second signature is also stylized and appears to read 'Héctor H. Linares'. There is a horizontal line drawn across the bottom of the second signature.